



OCHA

## Situación humanitaria y doble afectación en la región del Catatumbo (Norte de Santander)

(Diciembre de 2019)



EQUIPO LOCAL DE COORDINACIÓN NORTE DE SANTANDER

Este informe es elaborado por OCHA, con información de la misión Inter agencial del Equipo Local de Coordinación (ELC), el Grupo Temático de Protección (GTP) de Norte de Santander y misiones de monitoreo de los socios del ELC y el GTP<sup>1</sup>.

### DESTACADOS

- La persistencia y reconfiguración constante del conflicto armado en la región del Catatumbo, continúa generando afectaciones en civiles e incremento en el número de víctimas por las infracciones al DIH y las violaciones a los derechos humanos.
- Continúan emergencias humanitarias (desplazamientos masivos e individuales), ataques contra civiles (reclutamiento forzado, violencia sexual, homicidios, amenazas, entre otros) por causa de los enfrentamientos entre los diferentes grupos armados con presencia en la región.
- Ruptura interna en los movimientos sociales con trayectoria y reconocimiento en el Catatumbo, por el control social y territorial de los grupos armados, cooptando y silenciando el libre desarrollo de sus liderazgos.
- Aumento de la doble afectación<sup>2</sup>, ocasionada por la combinación de la crisis humanitaria de flujos migratorios mixtos y su vinculación al conflicto armado en la región del Catatumbo, siendo la población venezolana y los colombianos retornados los que presentan mayores riesgos, al igual que el aumento en la xenofobia hacia la población proveniente de Venezuela.
- Persistencia en el vacío de la respuesta humanitaria a víctimas de conflicto armado respecto al incremento a la respuesta humanitaria de la población migrante venezolana. También se evidencia limitada capacidad de respuesta de las personerías municipales y falta de recursos por parte de las Alcaldías locales.



### PANORAMA DE LA SITUACIÓN

La situación general en la región del Catatumbo (Norte de Santander) y particularmente en los municipios de Tibú, El Tarra, Hacará y Teorama, permite evidenciar que las dinámicas del conflicto armado persisten y se fortalecen en la región. Las continuas acciones armadas, víctimas por contaminación con minas y ataques contra civiles por parte de los grupos armados al margen de la Ley que tienen presencia en la región (EPL, disidencia FARC-EP<sup>3</sup>, grupos armados transfronterizos venezolanos<sup>4</sup>, y carteles mexicanos<sup>5</sup>, desencadenan no solo afectaciones de tipo humanitario sino violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades.

<sup>1</sup> Informe elaborado por OCHA con información de la misión inter-agencial del Grupo Temático de Protección GTP, del Equipo Local de Coordinación (ELC) de Norte de Santander, en jornadas de trabajo en diciembre de 2019 con Personeros Municipales, Secretarías de Gobierno Municipal, Enlaces de víctimas Municipales, Comisarías de Familia, Coordinadores de instituciones Educativas, Coordinadores de Puestos de Salud, Policía, Ejército, Iglesia, líderes comunitarios en Tibú, Casco Urbano y los corregimientos de Tres Bocas y La Gabarra, en el Tarra, Casco Urbano y Corregimiento de Filogringo, en Hacará, veredas Mesitas y Astilleros y Teorama, Casco Urbano y los corregimientos El Aserío y San Pablo.

<sup>2</sup> El concepto de doble afectación para este informe hace referencia a la vinculación de población proveniente de Venezuela en acciones de conflicto armado y economías ilícitas en la región del Catatumbo.

<sup>3</sup> En la región del Catatumbo, la comunidad indica que se cuenta con tres facciones de grupos de disidencia de las FARC-EP los cuales no están trabajando de manera articulada.

<sup>4</sup> Se indica por parte de la comunidad de Tibú, que el ejército venezolano ha solicitado al ELN entrenar jóvenes para combate.

<sup>5</sup> En el municipio de Tibú, comunidad manifiesta que se permitió el ingreso del cartel de Sinaloa. Así como el surgimiento de alianzas entre los diferentes grupos armados.

---

De igual manera, el grupo armado al margen de la Ley con mayor accionar sigue siendo el ELN, razón por la cual las comunidades manifiestan la necesidad de dar continuidad a las negociaciones de paz entre ellos y entre el gobierno nacional, a fin de disminuir las hostilidades y las consecuentes afectaciones e impacto contra civiles.

Entre los principales impactos de civiles se destacan: los desplazamientos masivos e individuales, confinamientos, restricciones de acceso a bienes, servicios y asistencia, reclutamiento forzado, homicidios selectivos, víctimas de minas antipersonal (MAP) y la utilización de mujeres y niños por parte de los diferentes grupos armados.

La masiva y continua llegada de población migrante proveniente de Venezuela a la región del Catatumbo y su vinculación en dinámicas propias del conflicto armado y/o economías ilícitas, agudizan las afectaciones humanitarias en el departamento, generando nuevas dinámicas de doble afectación. A octubre de 2019, se tenía un registro oficial de 1.630.903 venezolanos en Colombia<sup>6</sup>, de los cuales 183.215 (11,23%) se encuentran en el departamento de Norte de Santander, y 20.572 personas (11,22%) se encuentran en la región del Catatumbo<sup>7</sup>. Entre los municipios donde se presentaron las principales afectaciones por conflicto armado en lo corrido de 2019, se destacan Tibú, Ocaña y Abrego.

## DINÁMICAS DEL CONTEXTO

### 1. Desplazamiento Forzado.

En lo corrido de 2019 se presentaron doce (12) desplazamientos masivos en la región del Catatumbo<sup>8</sup>, afectando a cerca de 934 familias (3.472 personas)<sup>9</sup>, pertenecientes a los municipios de: San Calixto, El Tarra, Teorama, Hacarí, La Playa de Belén y Ábrego. Estos desplazamientos resultaron por la persistencia del conflicto armado en esta región del país, principalmente por los enfrentamientos entre la fuerza pública y el ELN, y entre el ELN y el EPL. Las continuas amenazas contra líderes sociales (directas e indirectas) y defensores de derechos humanos y sus familias, también ocasionaron la ocurrencia de estas emergencias. Las comunidades manifestaron preocupación, debido a que los desplazamientos se están empezando a presentar en veredas donde nunca se habían presentado, como resultado de la llegada de integrantes de otros grupos armados al margen de la ley a esas zonas fortaleciendo su control y presencia territorial.

En 2019 se registraron 420 familias, 1723 personas afectadas y atendidas con declaración individual por desplazamiento.<sup>10</sup> Sin embargo, persiste la reticencia

de las comunidades para realizar las declaraciones ante la ocurrencia de este hecho victimizante. El control social y territorial que imparten los grupos armados presentes en la zona<sup>11</sup>, es una de las causas por las que las personas no realizan la declaración ante represalias que se puedan tomar en su contra; así mismo la percepción de no recibir la ayuda humanitaria cuando realmente la requieren es otra causa para no declarar.

### 2. Restricciones al acceso.

#### ● Protección:

Las comunidades expresan que han experimentado restricciones a la movilidad por toques de queda<sup>12</sup>, retenes y controles ejecutados por la Fuerza Pública y los diferentes grupos armados al margen de la ley presentes en la zona. En este contexto, las y los líderes sociales han sido el grupo poblacional más afectado, especialmente en San Calixto, Hacarí y Teorama. Por la misma causa, se han generado grandes dificultades a la hora de efectuar desplazamientos por inmediaciones del territorio; las salidas son bastante limitadas, lo que conlleva a la no participación en las reuniones de las Juntas de Acción Comunal (JAC). Se hace especial énfasis en el hecho que, las mujeres son las que menos posibilidad tienen de participar por los riesgos que implica su movilidad.

#### ● Agua y saneamiento básico:

Durante 2019 se registraron 14 ataques del ELN contra el Oleoducto Caño Limón Coveñas en Norte de Santander<sup>13</sup>, los cuales generaron derrames de petróleo y contaminación de afluentes hídricos, limitando el acceso al agua a las comunidades. Por otro lado, las extracciones ilegales de petróleo por parte de los grupos armados han provocado contaminación de las fuentes hídricas y amenazas contra los líderes ambientalistas<sup>14</sup>. Así mismo, se han presentado restricciones de acceso al agua y hasta desabastecimiento, debido a la utilización de este recurso por parte de los pelotones móviles y puestos de control del Ejército en el Tarra, Hacarí y Teorama<sup>15</sup>.

#### ● Salud:

Se logró evidenciar que el acceso a la salud es restringido. Se observa escasez tanto del recurso humano como de medios logísticos, tales como insumos (equipos médicos, medicinas), ambulancia, etc, lo que provoca que la población

---

<sup>6</sup> Migración Colombia. Octubre de 2019

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> OCHA Monitor, fecha de corte 12 de diciembre de 2019.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ministerio Público / personerías municipales, corte: diciembre 2019

<sup>11</sup> Los grupos con mayor presencia en la región del Catatumbo son: ELN, EPL y Disidencia de las FARC.

<sup>12</sup> En la vereda Mesitas del municipio de Hacarí, se manifiesta que hay toque de queda a partir de las 7pm. Así mismo en Astilleros les impusieron toque de queda después de las 5pm.

<sup>13</sup> <https://www.rcnradio.com/colombia/santanderes/nuevos-atentados-contra-sector-petrolero-en-norte-de-santander-y-arauca>

<sup>14</sup> Esta situación fue manifestada por las comunidades de 3 bocas en el municipio de Tibú, haciendo mención a la contaminación del río socuavo.

<sup>15</sup> Esta situación fue puesta en conocimiento por parte de las comunidades de Buena Vista y el corregimiento de Filo Gringo (El Tarra), corregimiento de San Pablo (Teorama) y Mesa Rica (La playa – Hacarí) en las dos misiones conjuntas de GTP (abril y diciembre de 2019), lo que cual evidencia la persistencia en la afectación.

tenga que desplazarse hacia los cascos urbanos para recibir atención básica primaria.

El corregimiento Filo Gringo en el municipio del Tarra, actualmente tiene más de 10.000 habitantes y solo cuenta con una enfermera, según información de la comunidad; por lo anterior, solicitan ampliación del puesto de salud y la presencia de un médico, un odontólogo y un psicólogo las 24 horas. En casos de extrema urgencia la población que requiere atención en salud debe trasladarse al municipio del Tarra, donde hay dos (2) médicos haciendo su año rural, o hasta el casco urbano de Tibú. Sin embargo, el traslado lo deben hacer por vías de difícil acceso y deben contar con recursos para hospedaje ante la imposibilidad de regresar el mismo día; esta situación afecta en mayor medida la salud de las mujeres que desean asistir a sus citas ginecológicas, y aquellas que requieren controles prenatales<sup>16</sup>.

En el corregimiento del Aserrío del municipio del Teorama, la comunidad indica que hay aproximadamente 15.000 habitantes, pero no cuentan con médico ni insumos para la atención, y hay deterioro en el puesto de salud. Solo se cuenta con la presencia de una enfermera cada tres meses, se requiere hacer arreglos a la infraestructura, así como hacer cambio de camillas, dotación con medicamentos, puertas, equipos y ambulancia. En casos de urgencia, la población debe moverse hasta Ocaña donde no se les presta atención si no llevan remisión de Ábrego, ya que dependen de la ESE (Empresa Social del Estado) de este municipio; en vista de estas dificultades y principalmente en casos de cirugías, prefieren hacerlo en Valledupar o Cúcuta.

- **Medios de vida, seguridad alimentaria y nutrición:**

La alta contaminación con armas (MAP/MSE/TE)<sup>17</sup> y las acciones bélicas han afectado los cultivos de subsistencia de las comunidades campesinas en zona rural de San Calixto, Hacarí, La Playa de Belén y Teorama. Las acciones de los Grupos Armados al margen de la Ley en el territorio han generado mayores perjuicios contra los comercios de la región, así como el cobro de impuestos adicionales a los alimentos que llegan a zonas rurales más alejadas, propiciando el incremento en el costo de los alimentos. Ambas situaciones limitan el acceso de las comunidades a alimentos y por ende su seguridad alimentaria. Se destaca que, las comunidades indígenas Motilón – Barí y

Yukpa que hacen presencia en el Catatumbo también presentan este tipo de restricciones, lo cual ha ocasionado diversos casos de desnutrición y malnutrición. Vale la pena destacar que, en medio de este escenario las economías ilícitas asociadas al cultivo y comercialización de la coca aún mantiene en movimiento la economía de todo el municipio de Tibú<sup>18</sup>.

- **Educación:**

Se han registrados combates entre las Fuerzas Militares y los grupos armados al margen de la Ley en cercanía de los centros educativos. Estas acciones han atemorizado a las comunidades e impiden el acceso a clases de niños, niñas y adolescentes y jóvenes (NNAJ); así mismo, se han identificado eventos donde el personal docente y estudiantil ha quedado en medio del fuego cruzado. Se dio a conocer por parte de la comunidad afectaciones directas para más de 400 alumnos, específicamente en la vereda mesitas, donde los líderes sociales solicitan la posibilidad de trasladar la base del Ejército, ubicada en cercanías al centro educativo.

De igual manera, la comunidad del Km 25 vía la Gabarra (Tibú) manifiesta su preocupación por la instalación de un retén del ejército desde agosto de 2019 en cercanías al colegio del serpiente; En promedio asisten 350 estudiantes, quienes podrían convertirse en blanco indirecto de los ataques de los grupos armados presentes en la zona. Esta situación aumenta la deserción escolar, teniendo en cuenta que los padres prefieren no enviar a los NNA (Niños, niñas y adolescentes) a clases como medida de protección. Hay una relación entre los jóvenes colombianos y venezolanos y los cultivos de uso ilícito, que en parte explica el alto índice de deserción escolar; se estima que de 100 jóvenes venezolanos que se matriculan en los diferentes centros educativos de la región del Catatumbo, solo terminan el año escolar 50<sup>19</sup>.

Sumado a esto, las escuelas no son reconocidas por las comunidades como entornos seguros debido a las acciones armadas y la contaminación con MAP/MSE/TE en sus alrededores. Agudizando esta problemática, también se ha identificado un alto riesgo de vinculación y reclutamiento por parte de los grupos armados al margen de la ley que se encuentran en constante reconfiguración y fortalecimiento.

<sup>16</sup> Respecto a las brigadas de salud, la comunidad manifiesta que no son suficientes para la cantidad de población que requiere atención, debido a que los cupos de atención son limitados y las comunidades que habitan en zonas rurales alejadas del casco urbano no alcanzan a llegar a recibir la atención.

<sup>17</sup> MAP: Minas Antipersonal, MSE: Municiones sin Explotar, TE: Trampas Explosivas.  
<sup>18</sup> Según informe SIMCI de 2018, Tibú es el municipio con mayor número de hectáreas cultivadas de coca de todo el país.  
<sup>19</sup> Acorde con información por parte del plantel educativo de Filo Gringo.

En el corregimiento de Filo Gringo hay 13 sedes educativas donde asisten aproximadamente 800 estudiantes; las principales necesidades se relacionan con la falta de mobiliario en las escuelas y falta de útiles escolares. Se cuenta con un albergue habilitado para 30 niñas, sin embargo, este no cuenta con dotación ni con espacio para los niños, y además es necesario realizar el mantenimiento de este; en diciembre se encontraban 15 niñas bajo el cuidado voluntario de las docentes del colegio. En el Tarra se evidencia hacinamiento en las aulas; hay aproximadamente 3.000 estudiantes en todo el municipio, distribuidos por cursos de 50 estudiantes en promedio. En el corregimiento el Aserrío, del municipio de Teorama se cuenta con 29 sedes educativas donde asisten aproximadamente 2000 estudiantes, de los cuales 400 asisten al casco urbano.

### 3. Ataques contra la población civil.

En 2019 se registraron 264 eventos de ataques contra la población civil en la región del Catatumbo<sup>20</sup>, de los cuales se registraron 444 víctimas<sup>21</sup>, siendo el 90% de los afectados hombres y 10% mujeres. En 2019 se registraron 12 secuestros, 7 masacres y 169 homicidios en persona protegida<sup>22</sup>. Por otra parte, organizaciones sociales y la Mesa de Víctimas de Norte de Santander ha denunciado un incremento de las amenazas individuales y colectivas contra líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos, como consecuencia de la disputa territorial de los Grupos Armados No Estatales presentes en la región<sup>23</sup>. Preocupa la estigmatización de los líderes sociales como presuntos colaboradores de estos grupos y los señalamientos por su rol de mediadores y defensores de los derechos de sus comunidades.

A julio de 2019 se registraron cinco homicidios contra defensores y defensoras de DDHH<sup>24</sup>, dos de éstos de la región del Catatumbo; igualmente, se documentaron tres casos por atentados contra defensores y defensoras y nueve desplazamientos de personas con liderazgo en sus comunidades. Desplazamientos, robos de información, seguimientos y amenazas siguen siendo prácticas para limitar la labor de los defensores y defensoras. Las actividades de defensa de los derechos humanos que estarían generando mayor riesgo son el impulso a los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP, particularmente en lo relativo al avance de los programas de sustitución voluntaria de cultivos (PNIS), y actividades por la defensa de derechos ambientales<sup>25</sup>. Las actividades que promueven la

autonomía de las comunidades frente a los intereses de actores armados con control territorial siguen siendo los detonantes principales para estos ataques.

En el área de influencia del Km 25 vía a la Gabarra, se evidenciaron protestas por parte de líderes sociales contra la producción ilegal del combustible “pategrillo”,<sup>26</sup> debido a la grave contaminación de las fuentes hídricas. Los líderes han recibido amenazas y denuncian fotografías que les han tomado en los recorridos que ellos realizan en motos. Se tiene registrado de un ataque directo contra un miembro de ASOJUNTAS residente en la Vereda Socuavo Norte, quien fue víctima de atentado; este líder se ha opuesto a la extracción ilegal de petróleo que está afectando ambientalmente la cuenca del río Socuavo. También se conoció que, durante la Asamblea de la COCAM<sup>27</sup>, presuntos integrantes de un Grupo Armado al margen de la Ley amenazaron a varios líderes de esta agremiación<sup>28</sup>. Estos hechos generan la fractura de los movimientos sociales y el silenciamiento de la labor de los líderes y defensores de DD.HH.

En cuanto a los esquemas de protección asignados por la UNP<sup>29</sup>, las y los líderes que han podido acceder a estos manifiestan preferir no hacer uso de ellos, ya que consideran genera una mayor exposición a las amenazas. Lo anterior obedece a que las medidas de protección son inadecuadas para el contexto del Catatumbo, aumentando aún más el riesgo por hacerlos más visibles con chalecos y botones de pánico.

Con relación a la implementación del acuerdo de paz, y la reincorporación de las y los excombatientes de las FARC-EP de Norte de Santander, se cuenta con un registro de 20 excombatientes asesinados desde la firma del acuerdo de paz hasta diciembre de 2019, de los cuales 6 ocurrieron en el último mes<sup>30</sup>.

En la Vereda la Estación de Hacarí se han presentado enfrentamientos entre EPL y ELN, incluso con caída de artefactos explosivos cerca de las viviendas de la comunidad; por esta razón se viene generando un desplazamiento gota a gota de la población que habita en dicha vereda.

En las veredas Limoncitos, La estación, San Cayetano, Manzanares, Guaymaral, la Esperanza y Mesitas, también pertenecientes al municipio de Hacarí, los líderes se sienten bajo amenaza constante y los campesinos sufren la estigmatización por ser considerados como guerrilleros. En esta zona preocupa la ubicación del Ejército alrededor de tres

<sup>20</sup> OCHA Monitor, fecha de corte 31 de diciembre de 2019.

<sup>21</sup> La comunidad de tres bocas manifestó que desde tres bocas hasta el Km 25 en lo transcurrido del 2019 se han presentado 8 homicidios.

<sup>22</sup> OCHA Monitor, fecha de corte 12 de diciembre de 2019.

<sup>23</sup> Principalmente ELN y EPL.

<sup>24</sup> Acorde con los casos recibidos por OACNUDH en Norte de Santander.

<sup>25</sup> Esta situación se pudo evidenciar en el municipio de Tibú, donde se manifiestan amenazas directas e indirectas a los presidentes de las JAC que defienden las fuentes hídricas contaminadas por la extracción y contrabando de hidrocarburos.

<sup>26</sup> Pategrillo: gasolina extraída y vendida de manera ilegal como contrabando, utilizada en algunos casos para la producción de cocaína.

<sup>27</sup> COCAM: Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana.

<sup>28</sup> Esta situación ocasionó que uno de los líderes se viera obligado a sacar de la región a su familia hacia la ciudad de Cúcuta.

<sup>29</sup> UNP: Unidad Nacional de Protección

<sup>30</sup> UNVMC Norte de Santander.

(3) escuelas de la vereda La Estación; en este sentido, en septiembre de 2019, un cilindro lanzado por un grupo armado contra el ejército cayó en cercanías de un templo religioso poniendo en riesgo a la población. Los líderes también manifestaron que un campesino tuvo que abandonar su parcela en esta vereda debido a la instalación del Ejército en dicha parcela.

En el municipio de Teorama se presenta una situación similar en las veredas Piedras de Moler, Caño Seco y la Cristalina; el Ejército levantó trincheras y se instaló en los predios de familias campesinas; igualmente, se han registrado enfrentamientos y disparos en las noches, aumentando el miedo en la población y causando afectaciones en su salud mental.

#### 4. Reclutamiento y utilización de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ).

Sin conocer cifras concretas, en el área de influencia del Km 25 y veredas Socuavo Alto se recibió información sobre el reclutamiento de jóvenes en su mayoría venezolanos y colombianos retornados que residen en el asentamiento Miraflores (ubicado sobre la vía); estos reclutamientos se dan para poner a trabajar a las personas en las refinerías ilegales (pategrillo) y para integrar los grupos armados presentes en la zona<sup>31</sup>.

En los asentamientos Catalaura y Divino niño Jesús en cercanías de la Gabarra sobre vía terciaria, lugares donde se han ubicado venezolanos y colombianos retornados, se registra reclutamiento de jóvenes y adultos a cambio de un espacio para alojarse y dar seguridad a sus familias; algunos son incorporados a las filas de los actores armados y otros son destinados al trabajo en las economías ilícitas que se desarrollan en la región, principalmente mano de obra para raspar coca y en la producción de “pategrillo”. Se conoce sobre una delimitación de los asentamientos para el control de los actores armados, posiblemente producto de un acuerdo entre los Grupos armados al margen de la Ley presentes en la zona.

#### 5. Accidentes por contaminación con armas (MAP/MSE/TE).

Acorde con la información de Descontamina Colombia y la Campaña Colombiana Contra Minas, a diciembre de 2019 se registraron 16 accidentes con MAP en Norte de Santander (15 hombres, 1 mujer). De otro lado, según información de la Campaña Colombiana Contra Minas durante 2019, al menos siete (7) personas entre civiles y militares perdieron la vida en medio de estos accidentes. Los municipios con mayor

presencia de MAP/MSE/TA en el departamento son: Tibú, San Calixto, Hacarí y Abrego<sup>32</sup>.

Debido a la persistencia de conflicto armado y el fortalecimiento de Grupos armados al margen de la Ley en la región del Catatumbo, se ha evidenciado un aumento en la instalación y contaminación con MAP/MSE/TA; los grupos utilizan esta estrategia para disuadir y alejar. La alta contaminación con explosivos ha generado restricciones a la movilidad, acceso a bienes y servicios, al igual que limitaciones en la asistencia humanitaria y afectaciones a la población civil. Adicional a esto, la estigmatización que sufren las comunidades les impide denunciar la presencia de minas por el temor a ser señaladas como colaboradores o informantes de algún grupo armado que opere en la zona.

La amenaza por contaminación con minas antipersonal se encuentra potencialmente presente en cuatro municipios del Catatumbo, con una tendencia mayor en San Calixto, Hacarí y Teorama. La cifra de víctimas militares es superior a la de población civil.

#### 6. Afectación diferencial por género y edad.

Las principales afectaciones que manifiestan tener **las mujeres** obedecen a casos de violencia sexual<sup>33</sup>. Estas prácticas siguen ocurriendo con un alto nivel de invisibilización en ausencia de las denuncias por parte de las víctimas/sobrevivientes. El subregistro obedece a la falta de denuncia, ante las amenazas directas que hacen los victimarios contra las víctimas, o por temor y estigmatización de las comunidades. Aunque esta práctica es reconocida como delito, se evidencia una normalización como resultado del control territorial y social que ejercen los grupos armados en el marco del conflicto armado y ante las posibles represalias. Hasta noviembre de 2019, Norte de Santander registró 680 víctimas de delitos sexuales<sup>34</sup>, de los cuales: 572 eran mujeres, 107 hombres, y 376 correspondían a menores de edad. Los registros también evidencian que, 158 casos (23%) se registraron en la región del Catatumbo (143 mujeres, 15 hombres), de los cuales 90 casos fueron cometidos contra menores de edad representando el 56% del total de las víctimas de este hecho.

**Los niños, niñas y adolescentes (NNA)** siguen siendo víctimas de los reclutamientos por parte de los diversos grupos armados al margen de la ley; estos valiéndose del estado de desprotección, necesidades básicas insatisfechas y falta de oportunidades en que viven los NNA de la región del Catatumbo, son

<sup>31</sup> En el municipio de Teorama se tiene el reporte oficial de 2 casos de reclutamiento por parte de la disidencia de las FARC, sin embargo, son casos que no se han visibilizado por discrecionalidad de las propias familias, quienes prefieren no dar información.

<sup>32</sup> <https://www.laopinion.com.co/region/minas-antipersona-un-fenomeno-con-mas-afectados-en-2019-189559#OP>

<sup>33</sup> Según la Agencia de la ONU para los Refugiados – ACNUR, la violencia sexual y de género (VSG) se refiere a cualquier acto en contra de la voluntad de la persona y se basa en normas de género y relaciones desiguales de poder.

<sup>34</sup> Estadísticas Dijn de enero a noviembre 2019.

coaptados con ofertas de empleo, prebendas, dinero y en el caso de las niñas con regalos y enamoramientos por parte de los miembros más jóvenes de los grupos armados. Estas dinámicas se han visto incrementadas acorde con la información dada por las comunidades en los municipios de San Calixto, Hacarí, El Tarra y Convención, siendo a su vez una de las causas de la persistencia en los desplazamientos masivos e individuales, desvinculando los niños a sus entornos escolares<sup>35</sup>.

Respecto a la participación de las mujeres en espacios de decisión, en Filo Gringo, el Tarra y Hacarí se evidenció que las mujeres han fortalecido sus capacidades en los procesos organizativos a través de las JAC y las organizaciones sociales de mujeres; sin embargo, la presencia y control de los diferentes grupos armados hace que el miedo a participar sea mayor en vista de la vulnerabilidad que representan las amenazas para ellas.

En Norte de Santander, particularmente en el Catatumbo, existe una invisibilización de la **población con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversa (OSIGD)**, sin embargo, se conoce que, en el territorio persisten prácticas de rechazo, exclusión y agresión física y sexual contra dicha población.

## 7. Afectación de la Población Proveniente de Venezuela (PPV).

Las afectaciones de la población proveniente de Venezuela en los municipios monitoreados de la región del Catatumbo<sup>36</sup>, obedecen al aumento en la vocación de permanencia en estas zonas fronterizas con Venezuela, por su vinculación directa o indirecta al desarrollo de economías ilícitas y fortalecimiento en tropas de Grupos armados al margen de la Ley.

Desde el GTP de Norte de Santander se ha identificado esta **dinámica como una situación de doble afectación, la cual indica la vinculación y/o uso de población migrante proveniente de Venezuela a dinámicas propias del conflicto armado interno colombiano**. En julio de 2019 se caracterizaron 12.321 venezolanos con vocación de permanencia en la región del Catatumbo; a octubre del mismo año el registro había aumentado a 20.572<sup>37</sup>, siendo Tibú, Ocaña, Abrego y el Tarra los municipios con mayor concentración de esta población<sup>38</sup>. Se estima que el crecimiento poblacional

en la región del Catatumbo está entre 2.000 y 3.000 personas venezolanas por mes.

Siendo el ELN y el EPL los grupos armados con mayor presencia en la región del Catatumbo, se evidencia el control que realizan a la movilidad de la población migrante y retornada proveniente de Venezuela, así como su acceso al trabajo rural, bienes y servicios. Esta situación se mantiene invisibilizada por la dificultad para acceder a la población afectada, la carencia de declaraciones y la inexistencia de redes de apoyo en esta región.

Acorde con la información dada por las comunidades y las autoridades locales, la población proveniente de Venezuela está siendo vinculada en actividades ilícitas (raspado, transformación y comercialización de la coca e incluso contrabando y extracción ilegal de hidrocarburos), particularmente en el municipio de Tibú. Sin embargo, no se cuenta con cifras o estimaciones del número de PPV que la realizan<sup>39</sup>. Las comunidades ven vinculadas o utilizadas en estas actividades se da, ante la oportunidad de trabajo que están ven para conseguir el sustento económico de sus familias en territorio colombiano, o para aquellas que aún permanecen en Venezuela. No obstante, se evidencia un incremento en los homicidios de la PPV, posiblemente asociados a la participación en estas actividades; de los 132 homicidios registrados en 2019 contra población venezolana en Norte de Santander, 43 de ellos (32%) tuvieron lugar en la región del Catatumbo, la mayoría de ellos en Tibú (32 casos)<sup>40</sup>.

En el caso particular de las mujeres venezolanas, se evidencia que la dinámica del sexo transaccional en el Catatumbo ha cambiado por el aumento de su ejercicio en lugares clandestinos como fincas y casas; esta dinámica impide que las autoridades puedan monitorear la situación y asegurar la garantía de sus derechos. También se evidencia un riesgo creciente de explotación, abuso sexual, escenarios de redes de trata de personas y vinculación transfronterizas, así como posibles escenarios de explotación laboral<sup>41</sup>. La PPV más afectada son las mujeres, niñas y adolescentes, particularmente las refugiadas, migrantes e incluso las colombianas retornadas, quienes carecen de redes de apoyo y conocimiento sobre las rutas de atención a las que pueden acceder.

Se resalta que, la mayoría de las personas dedicadas al sexo transaccional carecen de acceso a servicios de salud<sup>42</sup>, controles sanitarios y monitoreos para el

<sup>35</sup> Acorde con la información proporcionada por la comunidad de Filo Gringo, una niña de 14 años que estudiaba en el plantel educativo y que se había incorporado hace aproximadamente 2 años a un AAI, murió en un enfrentamiento.

<sup>36</sup> Tibú, El Tarra, La Playa de Belén, Hacarí, Teorama.

<sup>37</sup> Migración Colombia, Estadísticas por municipios en Norte de Santander a fecha octubre 2019.

<sup>38</sup> En el casco urbano de Teorama se cuenta con una caracterización hecha por la Alcaldía local de 175 familias venezolanas, en 2019 no se realizó censo debido a las condiciones de seguridad.

<sup>39</sup> En el municipio de Teorama, manifestaron la dificultad de poder hacer un censo poblacional a la PPV debido a los riesgos de seguridad de la zona por la presencia del ELN.

<sup>40</sup> Instituto Nacional de Medicina Legal / diciembre 2019

<sup>41</sup> Los líderes sociales indican que a la PPV les están pagando 300 mil pesos mensuales con horarios de trabajo hasta las 2am.

<sup>42</sup> En el municipio de el Tarra, se manifestó por parte de la comunidad que se está brindando atención en salud a la PPV siempre y cuando cuenten con los recursos económicos para pagar la consulta.

respeto de sus derechos, la clandestinidad de los lugares donde permanecen, y la falta de capacidad institucional como consecuencia de la instrumentalización que sufren por parte de los Grupos armados al margen de la Ley. Se ha identificado la utilización de mujeres como informantes para los diversos grupos armados que operan en la región<sup>43</sup>. Es importante resaltar que, en el Catatumbo sólo se han denunciado tres (3) casos de delito sexual contra población venezolana durante 2019; sin embargo, las comunidades han indicado que existe un alto subregistro y que la población indígena Yukpa es particularmente afectada por este hecho victimizante.

La vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela es otro tema de preocupación, ya que, a pesar de estar recibiendo educación en los centros educativos por el derecho de inclusión, son quienes están más expuestos a la desescolarización. Los desplazamientos de sus padres, su movilidad por diversos municipios como consecuencia del trabajo en cultivos de uso ilícito y por las deficiencias estructurales que afectan al sector educativo, son la principal causa de las afectaciones que sufren los menores<sup>44</sup>. Adicionalmente, la afluencia de población venezolana ha provocado hacinamiento e insuficiencia de mobiliario (sillas, pupitres, ventiladores, etc.), material educativo y baterías sanitarias en los centros educativos. Los maestros manifiestan el alto riesgo de reclutamiento por parte de los diferentes grupos armados al que se exponen los menores venezolanos, haciendo alusión a que algunos casos de deserción escolar pueden obedecer a reclutamientos no denunciados.

Los reclutamientos se están dando a cambio de salarios<sup>45</sup>, trabajo e incluso lotes o viviendas en los asentamientos que se han ido formando en algunas veredas de la región<sup>46</sup>. Se destaca la necesidad de estrategias de atención psicosocial para atender a los menores que son víctimas del conflicto y además provienen de Venezuela; así mismo en los asentamientos se evidencian necesidades humanitarias relacionadas con agua y saneamiento, servicio de energía y acceso a salud<sup>47</sup>.

En virtud del incremento de población proveniente de Venezuela en el marco del contexto actual y reconociendo el flujo migratorio en toda el área rural de la subregión del Catatumbo, se indica que, el

riesgo de ocurrencia de accidentes con MAP/MSE/TE aumenta; lo anterior, teniendo en cuenta que muchos de los venezolanos desconocen las dinámicas de conflicto armado en la región del Catatumbo y su exposición a accidentes con minas por la constante y cada vez más alta movilidad en zonas rurales es alta.

Las comunidades destacan el creciente aumento de la población proveniente de Venezuela perteneciente al pueblo Indígena Yukpa, en su mayoría con la intención de quedarse en el territorio, sin la documentación que avale su legal permanencia. En algunas veredas lograron reunirse con autoridades locales y afiliarse en las JAC, en otras pueden desempañarse en trabajos de maestros, albañiles y pintores; también se destaca que, ante la necesidad de trabajo, en algunos casos son explotados laboralmente.

Adicional a esto, se identifica cada vez más en todo el departamento la estigmatización y xenofobia hacia la población proveniente de Venezuela; los factores se asocian a: competencia laboral<sup>48</sup>, alta participación de PPV en hechos delincuenciales<sup>49</sup>, atención y entrega de ayudas por parte de la cooperación internacional y el Estado Colombiano únicamente a población venezolana<sup>50</sup>. Vale la pena destacar que hay municipios donde explícitamente se ha prohibido la llegada de venezolanos nuevos con vocación de permanencia<sup>51</sup>.

Preocupa que, no hay un registro de los colombianos retornados, para quienes el acceso a servicios y atención humanitaria es aún más difícil por la invisibilización y falta de caracterización al momento de retorno. En algunos municipios, a través de las JAC<sup>52</sup>, se ha promovido la caracterización de PPV a fin de organizarlos y evitar su vinculación a grupos armados, lo cual ha permitido identificar los perfiles profesionales y su vinculación a trabajos formales no asociados al conflicto armado.

## Respuesta.

- ✓ Con relación a la respuesta institucional, durante 2019 se evidenció que persiste el vacío en la respuesta a víctimas del conflicto armado colombiano y un aumento en la atención a la crisis humanitaria migratoria de población venezolana,

<sup>43</sup> En el Km 21 de la vía que conduce a la Gabarra, se registró el homicidio de una mujer proveniente de Venezuela (el hecho se presentó cerca al lugar donde quemaron una cama baja al servicio del ejército) se indica que la mujer estaba prestando servicios de inteligencia.

<sup>44</sup> En el centro educativo de Filo Gringo manifiestan que la población de venezolanos es flotante, su estadía es aproximadamente de 2 a 3 meses.

<sup>45</sup> <https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/el-n-y-ex-farc-mafia-reclutan-a-migrantes-de-venezuela-por-us300/>

<sup>46</sup> Esta situación se da en el resguardo Catalaura (Corregimiento de la Gabarra), donde se evidencia la masiva llegada de PPV a fin de poder tener terreno en el asentamiento que se está consolidando. Se estima que a diciembre hay aproximadamente 600 familias asentadas.

<sup>47</sup> Estas necesidades se evidenciaron particularmente para el asentamiento Miraflores, en el municipio de Tibú, donde se estima hay aproximadamente 40 familias asentadas.

<sup>48</sup> Se estima que un jornal para un venezolano está en COP \$20.000 pesos y para un Colombiano COP \$45.000 pesos

<sup>49</sup> las Autoridades estiman esta participación en 70% de venezolanos y 30% de colombianos estos últimos en su mayoría retornados.

<sup>50</sup> Para 2019 del total de recursos de cooperación internacional se estima que el 90% fue para dar respuesta a la crisis migratoria de venezolanos y el 10% para afectaciones humanitarias por conflicto.

<sup>51</sup> En Luis Vero los AAI han ordenado que no quieren ver ni un venezolano más. No se permite el ingreso de nuevos venezolanos a la zona.

<sup>52</sup> En el corregimiento del Aserri, en el municipio de Teorama se tiene una caracterización de 40 venezolanos inscritos en la JAC, quienes por profesión se desempeñan como: profesores, plomeros y peluqueros. Así mismo, en el corregimiento de San Pablo se cuenta con 15 venezolanos inscritos en la JAC.

tanto de parte de la institucionalidad como de la cooperación internacional con presencia en Norte de Santander.

- ✓ Particularmente en los casos de desplazamientos masivos, confinamientos y reclutamientos se evidencia la limitada capacidad de respuesta de las Personerías municipales, ante los limitados recursos es sus planes de contingencia; por esta razón, la complementariedad en la respuesta por parte de la cooperación internacional se vuelve esencial.
- ✓ Las Personerías y Alcaldías del Catatumbo cuentan con el apoyo de los diferentes socios del ELC y GTP de Norte de Santander, para responder a la crisis humanitaria ocasionada por la persistencia del conflicto armado en la región del Catatumbo. Sin embargo, es importante fortalecer la respuesta por parte de las alcaldías y el departamento, en el marco de la Ley de víctimas 1448.
- ✓ En septiembre de 2019 la UARIV con apoyo de ACNUR hizo entrega del primer albergue para víctimas en el municipio de El Tarra, el cual podrá ser utilizado por la comunidad y las víctimas en caso de una emergencia humanitaria o desplazamiento.

- En 2019 también se evidenció dificultades y vacíos en la respuesta por parte del Gobierno nacional (enmarcada en la Ley de víctimas 1448), frente a la crisis humanitaria que viven las víctimas del conflicto armado que persiste en regiones como el Catatumbo. De otro lado, y contrario a las limitaciones de financiamiento para responder a dichas afectaciones, la respuesta a la crisis humanitaria de población migrante venezolana durante 2019 se incrementó considerablemente por parte de la cooperación internacional con presencia en el departamento de Norte de Santander.
- En este complejo contexto, preocupa el aumento en la xenofobia contra la población proveniente de Venezuela, el abandono Estatal a las víctimas de la región del Catatumbo, y el vacío en la caracterización de la población colombiana retornada, lo que dificulta el acceso a servicios y atención que si recibe la población migrante proveniente de Venezuela.

## Vacíos.

- La respuesta del Estado frente a la persistencia del conflicto armado en la región ha sido la militarización de los municipios. A diciembre de 2019 se contaba con más de 10.000 uniformados en el Catatumbo entre militares y policías<sup>53</sup>, ocasionando la persistencia de miedo y zozobra por los constantes enfrentamientos en esta región del país<sup>54</sup>.
- A pesar de las Alertas Tempranas emitidas por la defensoría del pueblo durante el 2019 en la región del Catatumbo<sup>55</sup>, las cuales informan sobre los riesgos que presentan las comunidades por la presencia y accionar constante de los diferentes grupos armados, las afectaciones a la población civil siguen en aumento frente a una limitada respuesta institucional a esta situación.
- Las comunidades manifiestan temor por la posible aspersión con glifosato a los cultivos ilícitos, teniendo en cuenta no solo las posibles afectaciones a su salud, sino las complejidades que representa para las comunidades que dependen de este cultivo para su subsistencia<sup>56</sup>; no se evidencia una sustitución integral con apoyo técnico y desarrollo de proyectos productivos clara que les garantice su subsistencia.

<sup>53</sup> <https://noticias.caracoltv.com/colombia/asi-trabaja-ejercito-y-policia-en-el-corazon-del-catatumbo-una-region-en-la-que-reina-la-zozobra>

<sup>54</sup> Las comunidades manifiestan que a pesar de contar con mayor presencia militar no se han visto resultados efectivos en la disminución de hostilidades en el marco del conflicto armado.

<sup>55</sup> AT No 011-19 (El tarra) / AT No 014-19 (Teorama) / AT No 024-19 (Abrego y la Playa de Belén).

<sup>56</sup> Preocupa que los niños y niñas del Catatumbo se están formando con la cultura de la coca (consumo, uso del dinero), haciendo alusión a la cultura de los narcos que esta retornando a esta región.